

Ecuador, 13 de junio 2022

**¡FRENTE A LA CRISIS CAUSADA POR EL MODELO
NEOLIBERAL: ORGANIZARSE ES NECESARIO, RESISTIR ES
JUSTO, LUCHAR ES UN DERECHO**

**DEMANDAS DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL, POPULAR Y
PLURINACIONAL**

**CONAIE, FENOCIN, FEINE, FENOC, trabajadores/as del campo y la
ciudad, campesinos/as, obreros/as, profesionales de la salud, educación y
estudiantes.**

Ecuador, junio de 2022

Movilización y unidad para enfrentar la crisis del capitalismo neoliberal

La CONAIE, FENOCIN, FEINE, FENABE, bananeros, arroceros, maiceros de la Costa, floricultores, campesinos de la Amazonía, pescadores, comunidades afectadas por la minería a gran escala, pobladores de barrios, asociaciones de médicos, jubilados, sindicatos públicos, estudiantes, transportistas, mujeres, diversidades y juventudes; es decir, la clase trabajadora del campo y la ciudad desde los distintos sectores del país, hemos llamado a una movilización nacional con el objetivo de impulsar en el corto y mediano plazo una agenda unitaria, que articule a nivel nacional, la resistencia y la lucha contra el capitalismo neoliberal.

Las necesidades son varias y las carencias múltiples. La crisis autoinducida por la burguesía, que beneficia solo a los de arriba, la estamos pagando los de abajo. Las condiciones materiales son insoportables. Venimos exigiendo empleo e ingresos laborales dignos, congelamiento del precio de los combustibles y de la canasta básica, abastecimiento e insumos médicos en los hospitales, respeto a los precios de los productos de las unidades campesinas pobres, ingreso a las universidades a los jóvenes de familias trabajadoras, ataque a la lumpenización del Estado y al despliegue de las bandas delincuenciales que soportan dicho negocio. Afirmamos que el clima de violencia e inseguridad es producto de la descomposición del Estado y la clase dominante que lo administra. La violencia no se arregla implementando un “Plan Ecuador”, matando a más pobres, sino eliminando la pobreza, creando fuentes de empleo; algo imposible en los márgenes del capitalismo.

De ahí que le resulte imposible a este gobierno, sordo, ciego e indolente, la condonación de deudas con el sistema financiero de productores que sostienen la alimentación de los

ecuatorianos, la supresión de la avanzada minera en los territorios de los pueblos y nacionalidades. Lo que hemos vivido en este tiempo representa la cara más agresiva del capitalismo defendida por la élite. Nos queda únicamente el camino de la movilización y la resistencia.

Meses atrás acudimos en varias ocasiones a estériles reuniones convocadas por el gobierno. De parte de las organizaciones sociales no ha faltado voluntad para resolver los problemas. Hemos tratado de dialogar, en condiciones desiguales y bajo una agenda que se nos ha querido imponer; que no quepa duda.

Además, partimos de una verdad conocida por todos: Guillermo Lasso no ha cumplido su programa de gobierno. Sus propuestas de campaña desde un inicio iban a ser incumplidas, sus concepciones acerca de la democracia y Estado, siempre fueron en beneficio de la clase a la que representa, a los sectores con los que ha convivido desde siempre, a los grupos con los que hace negocios y dinero.

Los cantos de sirena de la representación liberal, en una sociedad en conflicto desde la fundación de la República, se pierden ante una realidad que privilegia la profundización de un proyecto político y económico alentado desde el Fondo Monetario Internacional, respaldado por la banca y la burguesía antinacional, así como por los sectores más obtusos de la oligarquía.

Lasso y sus aliados siempre estuvieron más preocupados del saqueo, de acumular riqueza, producida por millones de ecuatorianos mal remunerados y mal alimentados, para depositarla en paraísos fiscales y en la banca extranjera. No les preocupa el empobrecimiento generalizado de nuestra gente, tampoco les importa el crecimiento aterrador de los asesinatos, robos y secuestros. Han desatado, en defensa de sus intereses, una guerra de exterminio contra los pobres, en el campo y la ciudad, donde la muerte es la evidencia más cruda del diario vivir de millones de trabajadores.

El error de muchos críticos del antes candidato, hoy presidente, fue y es pensar que la democracia se ejerce únicamente desde gobiernos y parlamentos. Que la Constitución se respeta por sí misma, cuando más bien ha funcionado como un instrumento variable y amoldable a quienes detentan el poder de forma momentánea, pero siempre en relación a sus intereses capitalistas.

Desde el inicio de la gestión de Lasso hemos venido alertando que su objetivo fue llegar al poder para desarrollar el proyecto político y económico de la clase dominante; el cual consiste en exprimir las rentas financieras y extractivistas a costa del sufrimiento de la población. Por eso, la burguesía y la oligarquía que lo rodean no ven el desastre nacional; al contrario, lo festejan pues les facilita, mediante la descomposición del Estado, la privatización y la militarización, el despojo, la explotación y la muerte de nuestra gente y pueblos.

Este gobierno está subordinado a la embajada norteamericana, y, por ende, a sus intereses estratégicos en la región en su lucha contra la autodeterminación de los pueblos de Abya Yala. Lasso funciona sin resistencia como un títere de los intereses imperiales, que buscan imponer su dominio político y militar, explotar los recursos naturales y garantizar el control de la economía por medio de la deuda externa, así como mediante la militarización de los territorios.

El FMI y la embajada norteamericana están en plena coincidencia con la burguesía y la oligarquía que apoya a Lasso; influencia palpable en el manejo de los medios de comunicación hegemónicos, la instrumentalización de los aparatos de justicia públicos y la profesionalización de los aparatos de seguridad para reprimir y exterminar. Es decir, todos en su conjunto, actúan como la cara más salvaje del capitalismo.

Por eso, a nuestras organizaciones comunitarias y de base les decimos, no se puede pensar un país en el que no existamos, dominado por los intereses extranjeros que despojan a los pueblos del territorio, el autogobierno y los recursos para garantizar el derecho a la vida según nuestra propia historia, necesidades y cosmovisión. Los pueblos indígenas hemos exigido que este país se autodefina como un Estado Plurinacional, hecho que ha quedado meramente enunciado y de forma pasajera, pues aún persisten rasgos coloniales y autoritarios en la administración pública.

En estos momentos llamamos a recuperar la tradición rebelde del pueblo ecuatoriano, a organizarse como necesidad, a resistir como algo justo y a vencer como obligación. Llamamos a los pueblos y nacionalidades, al campesinado pobre, a la clase trabajadora urbana y rural, a las mujeres, a los jóvenes, a todos quienes se ubican y toman posición en el bloque popular, sin oportunismos ni cálculos políticos electorales, a esta gran minga que no empieza ni termina este 13 de junio, sino que es continuación de un proceso ininterrumpido de lucha.

Convocamos a todos quienes vengan a decir y hacer, de corazón, en todos los espacios de la vida misma, a lo largo y ancho de este país. No solo las organizaciones convocantes a esta jornada de movilización tenemos la obligación de construir un gran frente donde confluyan los saberes y tradiciones más diversas de lucha contra la explotación y la dominación capitalista, cuyo eje central sea la socialización de la economía, el cuidado de la vida, la conquista del trabajo digno y la seguridad para todos por igual.

Nos encontramos en el inicio de un nuevo ciclo histórico de lucha, acumulado tras múltiples formas de resistencia contra el neoliberalismo, que ahora nos encuentra movilizados y organizados, con la moral alta, para avanzar hacia la construcción de un país para todas y todos, de un Estado Plurinacional real, donde se ejerza de forma efectiva el autogobierno, no sólo de los pueblos y nacionalidades, sino de todas y todos los ecuatorianos, en resistencia contra el capital y su imperio.

Lo decimos con optimismo de victoria, solo el pueblo salva al pueblo. Nos acogemos de forma irrestricta al derecho de la resistencia y autodefensa de la vida y el futuro de nuestras comunidades, organizaciones y la vida.

Una doble realidad: crisis de seguridad y grandes recursos ociosos

La realidad del Ecuador se nos presenta dividida, contradictoria. Por un lado, el precio del barril de petróleo WTI alcanza la cifra de 120 dólares. Las reservas internacionales del país suman cerca de 7.000 millones de dólares, y las autoridades económicas celebran que el “déficit” fiscal puede ser menor a 2% hasta el término del presente año.

Pero, por otro lado, estas cifras que en el discurso oficial parecerían indicar un buen estado de salud económica, no atinan a explicar la sensación de angustia que padecen día a día los ecuatorianos, al reducirse día a día los ingresos y la vida de la mayoría de la población.

En la actualidad, vivimos la que podría ser la peor crisis de inseguridad de nuestra historia. En los primeros tres meses del año, ya contamos más de 1200 muertes violentas, y al término del 2022 se proyecta que la violencia criminal podría tomar hasta 4000 vidas de ecuatorianos y ecuatorianas.

También padecemos, con total certeza, la peor crisis carcelaria: sólo en este primer año de gestión del gobierno nacional se contabilizan cerca de 300 muertes violentas de personas privadas de libertad. Una clara política de exterminio e inacción frente a un sector poblacional condenado a la deshumanización total.

Crisis de los derechos económicos y sociales

En el ámbito de la salud, los hospitales públicos no cuentan con medicinas, o estas son insuficientes, y lo que es peor no cuentan siquiera con insumos médicos elementales como gasas, bisturís o alcohol. Las noticias que celebran el equilibrio de las finanzas públicas se mezclan con las denuncias diarias de los pacientes por falta de atención adecuada en los hospitales, hecha que también se explica por el desmantelamiento del sistema de salud pública (recorte y despido de trabajadores, sobrecarga horaria, etc.).

La educación sufre también una situación crítica: 151 unidades educativas de la Costa ecuatoriana no pudieron iniciar las clases por falta de condiciones físicas y sanitarias, dejando en el aire a más de 58.000 estudiantes.

Esta situación dolorosa y contradictoria que atraviesa el Ecuador, nos permite concluir qué durante el primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso, este ha sido incapaz de traducir los supuestos logros en materia económica en bienestar para la población.

Grandes ganancias para la banca y los grupos económicos

Al contrario, los resultados de la reactivación económica producida por el debilitamiento por la pandemia de la COVID-19, se han concentrado cada vez más en un reducido grupo de empresas y empresarios de los grandes grupos económicos.

Así, la banca privada tuvo utilidades por USD 439 millones en 2021, lo que significó un aumento del 73% frente a 2020. Mientras, que cerca de 2 millones de ecuatorianos viven con ingresos inferiores a USD 1,60 diarios, y sólo un poco más de 30% de ecuatorianos conserva un empleo adecuado para marzo de este año, lo que es bastante inferior al nivel de aproximadamente 40% que tenía el país en 2019.

De esta manera, mientras los beneficios se concentran en pocas manos, el peso del severo ajuste fiscal exigido por el FMI, se coloca injustamente sobre las espaldas de la clase trabajadora urbana y rural, mientras unos pocos continúan acumulando sin cesar.

La crisis sobre los hombros de los trabajadores y los humildes

Enfrentamos una nueva ola migratoria que involucra a familias enteras, principalmente de las provincias más empobrecidas. Sólo en el año 2021, un total de 275.000

ecuatorianos viajaron al extranjero, pero solo 219.000 ecuatorianos entraron al país. Es decir, un poco más de 56.000 personas no regresaron.

Sin embargo, estos datos que alertan sobre la gravísima crisis social que afecta el país no han logrado motivar reacción efectiva del gobierno nacional, quién está empeñado sólo en cumplir rigurosamente las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, beneficiando a sus aliados capitalistas y desplegando un cerco salvaje al conjunto del pueblo ecuatoriano.

Como parte de esta agenda, el gobierno nacional ha expresado públicamente su intención de impulsar reformas que flexibilicen el Código del Trabajo, y que faciliten la privatización de las empresas públicas, tal como era de esperarse. No obstante, un movimiento sindical debilitado hace más de una década, mediante la implementación de políticas anti sindicales, anti huelga, y, por ende, anti obreras, en consonancia por una renovación precaria, se encuentra incapacitado, por ahora, para reaccionar en lo inmediato.

En este último caso, vemos con preocupación la opacidad que ha acompañado la posible venta del Banco del Pacífico, por lo que exigimos que el Gobierno Nacional transparente toda la información vinculada con la valoración patrimonial del Banco, y con el posible procedimiento de venta.

Recuperar la inversión social y una política fiscal y monetaria anti crisis

El fracaso evidente en materia social y de empleo, exige un cambio en la política pública que permita afrontar el grave problema de inseguridad y de financiamiento de los servicios públicos de salud, educación y seguridad social entre otros.

No es posible que el gasto social y la inversión pública se deterioren en los niveles actuales; mientras se mantienen congelados alrededor de \$7.000 millones de dólares en las reservas internacionales. Si se usaron solamente una parte de esas reservas para inversión social se podrían evitar enormes sacrificios como el incremento de la seguridad y el desempleo galopante. No obstante, está claro que el objetivo del gobierno es beneficiar al capital y sus aliados, destruir la economía nacional mediante la implementación agresiva del libre mercado.

De la misma manera, es indispensable una reforma institucional para fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de la evasión y la elusión de impuestos que generan al país una pérdida de \$4000 millones de dólares, protagonizado principalmente por los grandes conglomerados empresariales que usan paraísos fiscales y la banca extranjera para ocultarse y engañar a la autoridad tributaria nacional.

Detener la injerencia imperial en nuestra soberanía mediante sus TLC, TBIs, FMI e injerencia política y militar del poder del Norte.

Las consecuencias del modelo económico concentrador y excluyente impulsado por el gobierno de Lasso, también ha provocado un giro vasallo en la política exterior del país.

Durante este primer año de gestión, se han priorizado los intereses de un pequeño número de importadores y exportadores por encima de objetivos estratégicos básicos para nuestro

desarrollo, como el fortalecimiento de la producción agrícola y la defensa de los derechos de la naturaleza y las comunidades, pueblos y nacionalidades.

De esta manera se ha impulsado la firma de múltiples Tratados de Libre Comercio (TLC) con economías no complementarias con el Ecuador. Así, los productores de lácteos, recibieron con sorpresa el anuncio del presidente de importar libremente lácteos y carnes de la República del Uruguay, el pasado 20 de abril del presente año.

La inmediata rectificación del presidente, lejos de brindar tranquilidad ha demostrado la razón de ser de su política económica, misma que ha afectado la política exterior durante este primer año.

En este mismo sentido, las aspiraciones de adherir al Ecuador a la Alianza del Pacífico sin una clara estrategia de defensa de nuestros sectores productivos, pone en serio riesgo a las empresas nacionales de textiles, calzado, carrocías, electrodomésticos, y la producción del campesinado pobre que sostiene la alimentación de la gran mayoría de los ecuatorianos.

Hasta el momento se desconoce en qué situación está el proceso de negociación de los aproximadamente 20 TLCs que ha anunciado el Gobierno Nacional. Y peor aún, no se esperan noticias de que el Gobierno busque construir con la sociedad y los productores interesados en el desarrollo nacional una estrategia conjunta de negociación que proteja claramente la producción nacional.

En este sentido, exigimos que se transparente toda la información relacionada con estas negociaciones, y que la política de negociar TLCs sea consensuada con la clase trabajadora, sectores productivos responsables con la economía nacional, y la población que potencialmente se vería afectada por ellos.

En similar línea de acción, también vemos que la falta de una adecuada política productiva ha querido ser compensada con la atracción indiscriminada de la inversión extranjera, y sin considerar el enorme perjuicio que los arbitrajes internacionales de inversión han traído al país.

Con la complicidad de la Corte Constitucional, el gobierno de Lasso logró que un tratado tan riesgoso como el Convenio CIADI, se aprobará por decreto ejecutivo el pasado 16 de julio de 2021, sin ser debatido por la Asamblea Nacional.

También se conoce que el gobierno nacional tiene la intención de revivir los nefastos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Para ello, se está buscando que se interprete la Constitución, conforme a sus intereses, como es natural, para otorgar impunidad a las empresas transnacionales que operan principalmente en el campo de las actividades extractivas de la minería o los hidrocarburos.

Los pueblos y nacionalidades del país han protagonizado una lucha histórica para sancionar a las empresas transnacionales que degradan el medio ambiente o vulneran los derechos humanos de las poblaciones como lo testimonian casos emblemáticos de lucha como Nankints, Intag o Telimbela.

Por lo que exigimos, a quienes se abanderan de demócratas, el cumplimiento pleno de lo establecidos en la Constitución, y el respeto, más a quienes se jactan de demócratas, de la

jurisprudencia constitucional que invalidó a los mencionados TBIs y a mecanismos como el CIADI.

Como lo mencionamos en la parte inicial de este documento, otro aspecto que observamos con preocupación, es el alineamiento de la política exterior del gobierno nacional con la política internacional estadounidense.

Así, el 24 de marzo pasado, la Cancillería ecuatoriana expresó su "satisfacción" por la aprobación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, de la propuesta de Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos de 2022.

Esta propuesta de Ley es impulsada por los sectores de extrema derecha en los Estados Unidos, y tenemos serias preocupaciones que pueda comprometer la política de seguridad nacional, de por sí permeada por una doctrina de seguridad represiva y peligrosa, las relaciones comerciales y sectores claves, como la política de innovación tecnológica del país.

Por tanto, exigimos al gobierno que transparente las potenciales implicaciones que podría tener esta normativa, y las acciones que de parte de este se van a adoptar para resguardar los intereses nacionales, y de la clase trabajadora en especial, potencialmente comprometidos por la eventual aprobación de esta propuesta de ley.

Impedir la profundización del extractivismo

La voracidad extractivista es parte de nuestra historia desde la colonia y su resurgir desde fines del siglo XX. Los períodos de contracción del capitalismo en Ecuador crearon el escenario para ampliar la frontera petrolera, abrir la puerta a la minería metálica a gran escala y agudizar la agro industria y el monocultivo. Los momentos de aceleración de la política extractivista en Ecuador, coinciden con periodos de recesión económica mundial donde la urgencia de recursos para mantener la dinámica del mercado y sostener, de esta manera, la ganancia de las grandes empresas capitalistas hizo que la vida del país, los territorios comunitarios, la salud de poblaciones enteras, el medio de producción campesino, el equilibrio de los ecosistemas y las fuentes espirituales de pueblos y nacionalidades, se entreguen al imperialismo a cambio de muy poco.

Las transnacionales extractivas inciden en los territorios a todo nivel, no solo causan contaminación y deterioro ambiental, sus efectos alcanzan esferas tan variadas como las condiciones sociales y familiares, las prácticas culturales, y la soberanía. La minería destruye la vida, la organización comunitaria, socava los páramos, humedales y otras fuentes de agua, usando inmensas cantidades de agua dulce en sus etapas de exploración y explotación. Además, irrespeta los derechos de la naturaleza y el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecidos y de supuesto cumplimiento mandatorio en la Constitución, dejando a cambio la ilusión de la creación de fuentes de empleo, contaminación, desplazamiento y exterminio.

Con la pandemia provocada por la Covid-19, queda demostrada la poca relevancia del extractivismo petrolero, minero y agroindustrial, en un hecho sin precedentes que ha puesto de manifiesto que en pocos días de desaceleración del sistema capitalista, el planeta mostró claros signos de mejoría, por lo que desde el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador, decimos que es el

momento histórico para salir del modelo extractivista capitalista hacia una sociedad post - extractivista, planificada y centralizada en el trabajo y la socialización de los medios de producción.

Para ello es necesario en primera instancia fortalecer y unificar la organización de los sectores que se encuentran en lucha y resistencia frente a la arremetida del capitalismo para empezar a des mercantilizar la naturaleza y transitar hacia el uso de energía renovables seguras y de calidad, mediante el desarrollo tecnológico y científico a la par de la sabiduría y conocimiento de los pueblos y nacionalidades. Planteamos un verdadero y profundo cambio que priorice en todos los ámbitos, el respeto, a los derechos de la naturaleza para la restauración y armonía de la madre tierra, únicamente posible en una alternativa anti capitalismo.

Medidas urgentes para parar el desastre de la minería

La crisis energética, sanitaria, ecológica y económica en la que nos hallamos inmersos obedece al carácter de acumulación capitalista que, en el Ecuador, al igual que en todos los países sometidos al imperio del capital internacional, se manifiesta por un tipo de economía colonial y rentista, basado en un consumismo insostenible, principalmente en los países imperiales, cuya base es la explotación de los recursos naturales que destruye los hábitats y beneficia exclusivamente a unas reducidas élites económico-políticas a escala global, nacional y local.

En nuestro país, esta situación se expresa mediante la concesión, para minería metálica de, aproximadamente, el 8% del territorio nacional, lo que ha afectado a varias provincias del país donde se localizan al menos 20 megaproyectos mineros.

Estos proyectos han generado daños ambientales muchos de ellos irreversibles; atropellos y violencia hacia personas, comunidades y ecosistemas; despojo y desalojo de territorios; acaparamiento del agua e irrespeto al orden de prelación establecido constitucionalmente; intervención policial o militar en zonas de conflicto; criminalización y persecución contra líderes comunitarios; actos de bandidaje organizados por empresas privadas. Ahora mismo existen procesos judiciales contra campesinos e indígenas, incluyendo adultos mayores; entre otros, de Gualiel, Río Blanco, Bosque protector Shaime Cutucu, Cordillera del Cóndor, así como del norte del país, en Buenos Aires - Imbabura, Pacto - Pichincha.

Es necesario develar el carácter capitalista de la crisis que atravesamos, para entender que la subasta de territorios para la minería metálica, no es ni de lejos la solución a la misma, al contrario solo la agravaría, debido a que estos depósitos se hallan en zonas de páramos, bosques, cuencas altas de los ríos que son nacimientos de fuentes de agua, y que son la base de una economía agro productiva de largo plazo; los daños provocados terminarán afectando la producción de alimentos y a la población rural y urbana.

El gobierno liderado por Guillermo Lasso, dentro de su plan de gobierno y en declaraciones a medios internacionales, había señalado que los dos puntales para el reflote de la economía nacional serán la expansión de la frontera petrolera y la consolidación de la megaminería. Lo que no significa otra cosa que seguir las directrices del Plan Nacional Minero, orientado por el Banco Mundial que contempla: 1) la reapertura del catastro minero; 2) la aceleración de los procesos para la exploración y explotación flexibilizando el cumplimiento de normativas; y, 3) la construcción de infraestructuras a escala regional,

por ejemplo, hidroeléctricas, carreteras, trenes para el transporte de minerales y puertos. Sin embargo, en el periodo electoral, se comprometió a prohibir la minería en páramos, fuentes de agua, áreas protegidas, reservas naturales, zonas intangibles y ecosistemas frágiles, realizar consultas previas vinculantes y respetar las decisiones de las Consultas Populares. Algo impensable si revisamos la perspectiva ideológica del primer mandatario.

Advertimos que, de consolidarse este Plan, se multiplicarán distintas formas de violencia y, sobre todo, se materializa la dependencia a un tipo de economía de la cual el país no podrá desprenderse en las próximas décadas, impidiendo de manera irreversible el desarrollo de una economía socialmente responsable con la naturaleza y la vida de la población de todo el país.

Nuestro país alberga una extraordinaria mega biodiversidad, una enorme riqueza étnica y cultural, altas potencialidades de desarrollo agrícola, pecuario, artesanal y de turismo comunitario, ecológico y científico, todas ellas alternativas sustentables. Apostarle al desarrollo de la megaminería significa avasallar las posibilidades de tener un Ecuador soberano, que potencialice sus riquezas, cuide su riqueza biológica, proteja sus fuentes de agua y territorios que permiten producir alimentos, ya producidos por trabajadores agrícolas y campesinos pobres, que fomente mercados locales y justos, que se ocupe de la recuperación de los suelos degradados, la gestión integral de los residuos y del agua, el apoyo a los pequeños productores.

Con estos antecedentes, damos a conocer a la sociedad civil ecuatoriana nuestras 10 demandas para la movilización nacional.

Las 10 demandas de la movilización nacional, popular y plurinacional

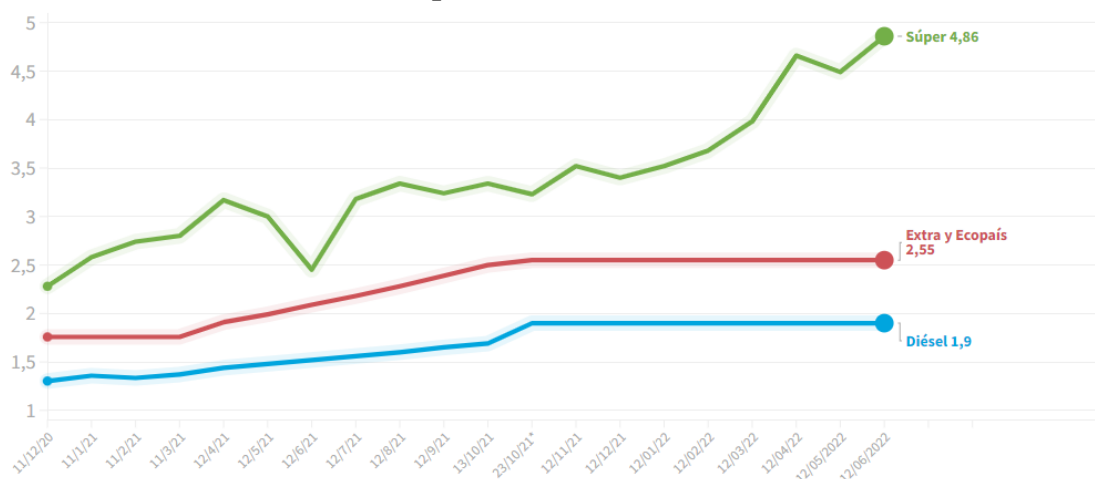
1. Congelar los precios del Diésel a \$1,50 y la gasolina Extra y Ecopaís a \$2,10, y focalización de subsidios a sectores vulnerables.

Derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización de subsidios a los sectores que necesitan subsidio y un precio diferenciado de los combustibles en el ámbito de la pequeña y mediana producción: agricultores, campesinos pobres, transportistas, pescadores.

- Hasta ahora se ha incrementado el 65% el precio del Diesel y 37% el precio de la gasolina.
- Después de un largo período de deflación, desde julio el nivel general de precios nuevamente empieza a subir por el incremento del precio de los combustibles.
- La última inflación acumulada fue de 1.28% en 2021. Cuando hace un año atrás hubo una deflación de -0.55% en 2020.
- La inflación reduce el ingreso real de los hogares, por lo tanto, la inflación genera más pobreza, por cada punto (1%) de mayor inflación, ingresan a la pobreza 54 mil nuevas personas.
- La liberalización de la cotización de los combustibles ha permitido que la guerra imperialista entre Ucrania y Rusia incrementen los precios de manera histórica, provocando el peor escenario en una economía: inflación generalizada combinada con recesión económica.

- Mientras el costo de vida se incrementa, los precios de los productos campesinos se encuentran estancados, más los insumos para la producción agrícola. Si el gobierno no congela los precios, está provocando un desastre social tanto en el campo como en los sectores empresariales, alineados y no alineados a su política, que dependen del consumo interno nacional.

Evolución del precio de los combustibles



Fuente: Mónica Orozco

2. **Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa. Condonación de las deudas de los pequeños y medianos productores del campo.**

Moratoria de las deudas para más de 4 millones de familias por el periodo mínimo de un año y renegociación de las deudas con reducción de tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). Condonación de los créditos del sector productivo y detener acciones desde los organismos crediticios que impliquen el embargo de bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.

Además de la moratoria, se propone crear una comisión especial para investigar las denuncias de abusos y cobros indebidos de la banca y las deudas de los hogares en mercados informales de crédito (chulco, agiotistas). De esta manera se investigará en el sistema de justicia y definir un plan para ayudar a población vulnerable (agricultores, migrantes, etc.) que hoy están ahogados con deudas ilegítimas fruto del poco acceso a crédito formal y los abusos de la banca.

Análisis de la problemática

Mientras la pobreza y la inseguridad se multiplican, la banca privada obtiene sólidas ganancias por USD \$439 millones. Según datos de la Superintendencia de Bancos, solamente en mayo de 2022 los 24 bancos privados en el país obtuvieron aproximadamente 146,44 millones de dólares, casi 60 millones más que el año

pasado. De esta manera, las utilidades de Banco de Guayaquil y Produbanco crecieron 127%, el Banco Pichincha tuvo un crecimiento de 104%; pero la economía apenas se recupera con un crecimiento del 3%. Las enormes utilidades de la banca se extraen gracias a los sacrificios que hace la clase trabajadora pagando las deudas, intereses, multas y embargos realizados que crecieron durante la pandemia de la Covid-19.

3. Precios justos en los productos del campo en las tres regiones del país, subsidio agrícola y no firmas de TLC que destruyen la producción nacional.

Los productos del campo como la leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate, yuca, papa china, plátano, naranjilla, frutas y más. Combate a la especulación de comerciantes e intermediarios, protección de la producción agrícola nacional, para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.

Implementación del subsidio agrícola, de insumos, herramientas y tecnologías para el desarrollo y fortalecimiento de la producción campesina en todos sus niveles.

Implementación de una política de estado que garantice una comercialización con rentabilidad para los productores agropecuarios del país.

- Sector Floricultor. - Regulación del cobro de regalías por el derecho de patentes de acuerdo a la realidad de los pequeños y medianos productores.
- Resolver el precio de la leche. Mientras la Asamblea fijó el precio por litro de la leche en venta directa en \$0,42, el costo de producción sobrepasa los \$0,50 y más del 80% son pequeños productores, que quedan desamparados por la normativa. El precio en las cadenas de supermercados impuesto por los industriales subió, pero en el campo se sigue con precios que no cubren ni el costo de producción.
- Banano. - Es fundamental establecer un cupo fijo de exportación bananera que le corresponda a pequeños y medianos productores, desprotegidos por las normativas y regulaciones actuales. Demandamos el desarrollo de mecanismos directos para un control efectivo de regalías por patente, los cuales se basen en principios de retribución y reconocimiento, tanto para los sectores productivos, como para las patentes genéticas. Establecer nuevas líneas de crédito de 20 y 30.000 dólares a 10 años plazo con el 5 %, a pequeños productores de hasta 10 Hectáreas.
- Arroz. - respeto al precio oficial para pequeños y medianos productores, cuotas de exportación propias.

4. Empleo, derechos laborales, libertad de sindicalización y organización de la clase trabajadora.

Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Pago inmediato de las deudas al IESS.

Exigimos trabajo digno, lo que implica sostener e incrementar un salario mínimo en relación a la canasta básica. Que se desista de más despidos en el sector público y se reintegre a todos los profesionales de la salud y educación despedidos.

Además, exigimos se derogue la política anti obrera y anti sindical, reglamentando el derecho a la huelga y la organización de la clase trabajadora, tanto en el ámbito público como privado.

Análisis de la problemática

- La precarización laboral no incrementa el empleo, el empleo mejora cuando las familias consumen y mueven la economía. Por eso se necesita una política pública para sostener los salarios e inyectar inversión pública para aumentar el consumo. Solamente así se fomentarán las ventas y se contratará gente.
- La precarización laboral de la Ley de Apoyo Humanitario ya demostró que no tuvo un impacto en el desempleo que alcanzó 4.9% en agosto de 2021, tampoco afectó el trabajo adecuado que está en 32%.
- La falta de trabajo y la política de precarización del gobierno, generaron una nueva ola migratoria. El gobierno tiene que desistir de implementar la peor contrarreforma laboral que se haya presentado en la historia del país.
- La evidencia empírica muestra que: I) la flexibilización no estimula la creación de empleo. II) Por el contrario, el nivel de empleo se define producto del ciclo económico (cuando las empresas venden o no). III) El desempleo aumenta rápidamente en períodos de crisis económica y decrece lentamente durante la fase de recuperación.
- En Ecuador también se demostró que la precarización laboral de la Ley de Apoyo Humanitario no mejoró el empleo. Aunque esta reforma laboral entró en vigencia en junio 22 del 2020, solamente tuvo un impacto en la disminución de los salarios, pero el desempleo pasó de 3.8% en diciembre 2019, a 4.9% en agosto de 2021; y el subempleo real pasó de 46% a 51%, en el mismo período de tiempo.

5. No a la ampliación de la frontera extractiva minera / petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.

A nivel nacional, 385.487,44 hectáreas de territorio indígena están afectadas por concesiones mineras. La mayoría del territorio indígena afectado por minería (98,22%) está concesionado a minería metálica, altamente contaminante. De la Amazonía ecuatoriana se extrae el 99% del petróleo, que constituye alrededor del 45% de las exportaciones nacionales (USD 2.857,1 millones entre enero y marzo de 2022). El 62.91% de la Amazonía es territorio indígena. El territorio de 10 nacionalidades indígenas está afectado por bloques petroleros, en más del 80% de su superficie. Esto supone que los territorios indígenas continúan sosteniendo la

economía del país, algo que debe detenerse a través de la diversificación productiva y la reforma fiscal (impuestos a las grandes fortunas y grandes grupos económicos), que permitan reducir la dependencia del petróleo y la presión sobre los territorios ricos en recursos naturales. Detener la privatización, conjuntamente con frenar la fuga de capitales y promover la justicia fiscal son medidas que cuidan el ambiente, la soberanía nacional y al pueblo ecuatoriano.

Exigimos que el excedente de ingresos por exportaciones de petróleo, debido al aumento de los precios, se utilice para saldar la deuda social.

Exigimos detener los proyectos mineros estratégicos Panantza San Carlos, Río Blanco y Loma Larga, que afectarán a fuentes de agua, así como el aumento de la frontera extractiva en los territorios sea de pueblos y nacionalidades o no. Así mismo, demandamos una auditoría integral sobre las afectaciones a las fuentes de agua y territorios.

Exigimos la derogatoria de los decretos ejecutivos 95 (Plan de Acción inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero) y 151 (Plan de acción para el sector minero del Ecuador), porque promulgan la privatización del petróleo y los minerales; proponen reformular los contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos sin establecer porcentajes mínimos de beneficio para el Estado. Así mismo, subordinan al Estado a los sistemas internacionales de arbitraje y protección de inversiones privadas, hacen caso omiso de las afectaciones de las actividades extractivas al ambiente y a los pueblos y nacionalidades indígenas; acelera y “simplifica la entrega de permisos ambientales y de agua lo que equivale a una forma de flexibilización de la normativa ambiental para atraer inversión extranjera a costa de la salud de los ecosistemas y de la institucionalidad ambiental.

Por tanto, exigimos se declare a los territorios originarios amazónicos como territorio libre de extractivismo, ya que ha violentado los Derechos Humanos, Colectivos y de la Naturaleza. Además, exigimos la reversión al estado de todas las concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas en todas sus fases y la restitución de los territorios ancestrales entregados a las empresas extractivas, así como la compensación y reparación inmediata e integral de los daños y perjuicios ambientales, psicológicos, culturales y económicos ocasionados por esta actividad.

6. Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.

- Autonomía administrativa y financiera para la educación intercultural bilingüe
- Cese a la criminalización de las autoridades indígenas por ejercer jurisdicción indígena

- Exigimos que el Estado cumpla debidamente con los convenios internacionales y la misma Constitución que reconoce el derecho a la autonomía, y la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias.

Análisis de la problemática

Los pueblos y nacionalidades indígenas, junto con la población montubia y afro, muestran las más altas tasas de pobreza extrema (45.1% y 19.5%, respectivamente); y presentan el mayor aumento de pobreza extrema (con un crecimiento de 11.7 y 13 puntos, respectivamente).

La superación de las condiciones de pobreza de los pueblos y nacionalidades afros, montubios e indígenas exige políticas que respeten de forma obligatoria los derechos colectivos. Además, la política de ampliar la frontera extractiva, ha producido serias presiones sobre las comunidades asentadas en las áreas de influencia de los proyectos extractivos, conflictos presentes desde antes por la acción autoritaria y desmedida del Estado.

7. Alto a la privatización del patrimonio nacional y no al sometimiento de los tribunales internacionales como el CIADI.

El 24 de marzo pasado, una amplia mayoría de asambleístas decidieron negar y archivar el proyecto de Ley de inversiones propuesto por el Ejecutivo. Este incorporaba mecanismos flexibles para enajenar el patrimonio nacional, incluyendo áreas sensibles como salud y educación. Sin embargo, el proyecto de repartir los activos nacionales continúa por otros medios: el Presidente Lasso ha anunciado la privatización de campos petroleros, empresas estatales, las farmacias externas de la red pública de salud, y ha puesto un particular interés en la venta del Banco del Pacífico.

Exigimos, en línea con el rechazo del proyecto de Ley de Inversiones, que se suspendan los procesos de privatización del patrimonio nacional, que han sido llevados adelante con opacidad, y respecto de los cuales hay evidentes conflictos de intereses como la venta de Banco del Pacífico. Por eso decimos, no a la venta del Banco del Pacífico.

Además, demandamos que el país salga del CIADI porque, para favorecer las privatizaciones y la impunidad corporativa, se somete al país a tribunales internacionales que ceden nuestra soberanía nacional, e impiden que los ecuatorianos podamos regular con eficacia a las transnacionales para que cumplan con su función social, ambiental o fiscal.

8. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.

El impacto de la pandemia COVID y la severa política de austeridad llevada a cabo en el país, resultado de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, han afectado negativamente el disfrute de los derechos básicos de la población. Así, con cifras actualizadas hasta 2021, el 32.2% de ecuatorianos viven pobres con menos de 2.80 dólares al día y el 14.7% de la población se encuentra en pobreza extrema, sobreviviendo con 1.80 dólares diarios.

Esta situación se ve agravada por el aumento de precios de varios bienes y servicios de la canasta básica familiar, especialmente de los alimentos y el transporte, ocurrido durante estos últimos meses. Esta situación exige implementar múltiples políticas, entre ellas recuperar las capacidades institucionales del Estado en el control de prácticas especulativas y de abuso del poder de mercado, hecho que aparentemente no es política de gobierno.

9. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Fortalecimiento de la salud y educación, incluyendo la asignación de presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal.

Educación. - Este año, cerca de 93.000 bachilleres no podrán acceder a la educación superior. La severa política de austeridad fiscal continuada por el presidente Lasso ha impedido incrementar los cupos de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Frente a ello, las alternativas propuestas por el Gobierno Nacional rayan en el cinismo: se alienta a los jóvenes a incorporarse en las fuerzas de seguridad, o sencillamente a resignarse a tener que declinar sus proyectos de vida.

Frente a este panorama, reivindicamos el derecho de los y las jóvenes a una educación superior de calidad. En este año, el Gobierno Nacional recortó el presupuesto de las Instituciones de Educación Superior en más de USD 100 millones. Por lo que exigimos la restitución del presupuesto a la Universidad ecuatoriana, y que se implementen mecanismos transparentes de ingreso.

Exigimos que se cumpla el derecho al acceso a la educación superior de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, en consonancia con los principios de la Constitución Política del Ecuador, que garantiza el acceso a educación de calidad, al mismo tiempo de establecer una política de derechos para los pueblos y nacionalidades.

Salud. - Los hospitales y el sistema de salud pública, el cual incluye farmacias públicas, se encuentran desatendidos, desabastecidos y en una situación de olvido y desfinanciación crónica. Exigimos la dotación de insumos y personal necesarios para abastecer las necesidades urgentes del pueblo y garantizar el acceso a salud digna y de calidad.

Demandamos una política pública que garantice el acceso a educación debe remitir la deuda de becarios, segmentando las deudas, y remitir el decreto sobre las deudas de becarios hasta diez mil dólares de la banca pública.

10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.

Se proyecta que al final de este año, la violencia criminal podría tomar hasta 4.000 vidas a nivel nacional. Los recortes al gasto público también han afectado el presupuesto de seguridad, lo que ha debilitado institucionalmente a las fuerzas del orden, más no la perspectiva que éstas han desarrollado históricamente desde un enfoque represivo y alejado de los derechos humanos; es más, se ha venido profesionalizando mediante diversos enfoques y cuerpos asesores en las últimas décadas.

El gobierno parece estar más interesado en reforzar la capacidad de control social represivo frente a las manifestaciones de descontento popular a su gobierno que en defender la vida y seguridad de los ciudadanos frente a la delincuencia común y organizada, misma que ha penetrado en las estructura político administrativa del Estado, como de las mismas fuerzas de seguridad. La aprobación de la Ley de uso progresivo de la fuerza, es un preludio de persecución y represión a toda señal de descontento, en contexto con el aumento de las acciones violentas del crimen organizado.